del Código de Enjuiciamientos, la jurisdicción de la Ilustrísima Corte Superior, en el presente juicio, ha estado limitada á resolver si hay ó no un verdadero despojo, ordenando, en el primer caso, la restitución con las calidades que previene la ley: que, según lo dispone el artículo mil trescientos setenta y tres del mismo Código, para resolver que hay despojo y ordenar la restitución, es indispensable que el demandante haya probado los dos extremos de haber poseído y haber dejado de poseer: que, recibida á prueba la querrela interpuesta por don Emilio Althaus, éste no ha probado que el juez de primera instancia doctor don Gregorio Galindo con sus providencias lo haya privado de la posesión que tenía; declararon nula la resolución de fojas setenta y ocho, su fecha dos de marzo último, como infractora de las leyes citadas: la reformaron, declarando que don Emilio Althaus no ha probado el despojo judicial á que se refiere su querrela: dejaron á salvo el derecho de las partes para que lo ejerzan como vieren conveniente en el actual estado de la causa y los devolvieron.

Ribeyro.—Cossio.—Alvarez.—Muñoz—Arenas.—Ovicdo.—Cisneros.

Se publicó conforme á ley, de que certifico.

Manuel L. Castellanos.

Caso en que la estralimitación de los peritos, al emitir sus dictámenes, no da lugar al recurso extraordinario de nulidad.

Excmo. señor:

Por auto de 2 de Julio de 1870, á fojas 49, cuaderno de pruebas, se mandó practicar la liquidación de intere-

ses solicitada por la parte de don José Manuel de Idiáquez, en el 2º otro sí del recurso de fojas 48 vta. como continuación de la que hizo la Tesorería Departamental hasta 3 de Junio de 1855, á fojas 29 vta., cuaderno principal. El apoderado del convento de la Buena Muerte y el síndico de su concurso, ambos consintiendo en la liquidación, bien que calificando de indebidos los intereses, nombraron sus respectivos peritos á fojas 53 y 55. Debieron, de consiguiente, los peritos practicar la liquidación de dichos intereses llenando el objeto del auto de su nombramiento conforme al artículo 263 del Código de Enjuiciamiento, ó negarse á ella si acaso tuviesen alguna razón legítima. Pero no ha sucedido lo uno ni lo otro: el perito del acreedor Idiáquez, en su dictamen de fojas 58, hizo la liquidación de los intereses cuestionados, sin perjuicio de consultar la rebaja que debía hacerse por los devengados, después de la formación del concurso. Los peritos del convento y del síndico procedieron de otro manera en su dictamen de fojas 60: principiaron á hacer observaciones contra la responsabilidad de intereses, no sólo por los caídos en el tiempo posterior á la liquidación que practicó la Tesorería á fojas 29 vta., sino absolutamente contra toda obligación de intereses, aun desde 3 de Enero de 1833 en que declaró el Gobierno que se debía abonar el 6%; y concluyeron dichos peritos rebajando del capital de 21.360 pesos 5 $\frac{3}{4}$ todas las cantidades que el acreedor había recibido á cuenta de los intereses: así dejaron reducido el crédito á 2.864 pesos 6 $\frac{1}{4}$ (fojas 60, cuaderno de prueba).

El dirimente, á su vez, desconociendo también los intereses, rebajó, además del capital, la contribución de predios que cobraba el acreedor y lo redujo á 2.214 pesos 7 r. $\frac{3}{4}$, (fojas 65 vta., cuaderno id.)

Se ve, pues, que los peritos, lejos de liquidar intereses determinados, fuera ó no justa la responsabilidad, han fallado todas las cuestiones jurídicas pendientes.

Tales dictámenes no podían, de consiguiente, subsistir sino, que, ó se debía liquidar los intereses como se mandó á fojas 49, cuaderno de pruebas, quedando para la sentencia la descisión de las excepciones con que se defiende

el convento de la Buena Muerte, ó debía reservarse dicha liquidación para después de pronunciarse la sentencia.

Hay, por tanto, nulidad en el auto confirmatorio de f. 74, cuaderno i l., su fecha 3 de Marzo último, en que la ltma Corte Superior de esta capital, ha declarado sin lugar la tacha opuesta á la operación de los peritos; y reponer la causa al estado de que se cumpla el auto consentido de f. 49, cuaderno id, reservándose las excepciones jurídicas para la sentencia.

Lima, á 17 de Mayo de 1871.

URETA.

*Lima, Julio tres de mil
ochocientos setenta y uno*

Vistos: con lo dictaminado por el señor Fiscal, declararon improcedente el recurso de nulidad interpuesto por parte de don José Manuel de Ibláquez; y los devolvieron.

Ribeyro.—G. Sánchez.—Cossio. — Alvarez. — Muñoz. — Vidaurre.—Lama.

Se publicó conforme á ley, de que certifico.

Manuel L. Castellanos.